

Bogotá D.C., 23 de julio de 2024

Fecha: Mayo 6 - 2025

Hora: 4:46 PM
Rosio

PROPOSICIÓN

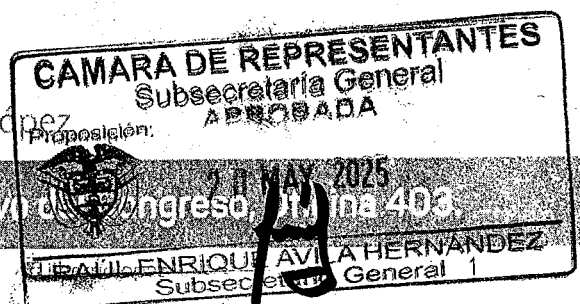
De conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política y los artículos 233, 234 y 237 de la ley 5° de 1992; y considerando:

1. Que el actual Gobierno Nacional ha impulsado de manera prioritaria la actualización catastral con enfoque multipropósito en todo el territorio nacional, un proceso administrativo con consecuencias directas y significativas sobre la carga tributaria de millones de colombianos a través del impuesto predial unificado.
2. Que, paradójicamente, mientras se implementa esta actualización masiva, el propio Gobierno prorrogó y modificó, mediante su Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), la Ley 1995 de 2019, normativa diseñada *precisamente* para establecer topes y supuestamente proteger a los ciudadanos de incrementos desmedidos en el impuesto predial tras dichos procesos de actualización.
3. Que, no obstante, la existencia de estos mecanismos legales de contención promovidos por el mismo Ejecutivo, el país entero es testigo de una avalancha de reportes, denuncias, quejas generalizadas e incluso protestas ciudadanas provenientes de innumerables municipios y departamentos, que dan cuenta de aumentos exorbitantes de hasta el 3000% de aumento en el impuesto predial, calificados por los afectados como confiscatorios y financieramente asfixiantes, en el impuesto predial liquidado después de la intervención catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
4. Que esta cruda realidad, que golpea el bolsillo de familias, campesinos y pequeños propietarios a lo largo y ancho de Colombia, evidencia una alarmante desconexión entre las políticas diseñadas en Bogotá y el impacto real en la vida de los ciudadanos, sugiriendo un posible fracaso en la implementación, una negligencia en la supervisión por parte de las entidades responsables, o una fundamental insensibilidad del Gobierno frente a la capacidad económica del colombiano de a pie.

H R Jhon Jairo Berrío López

Bogotá, Carrera 7 N° 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 403

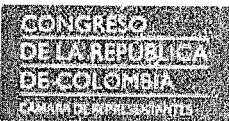
jberriolopez *@jhonberriolopez*



20-194

7h

20-194



5. Que esta situación, que erosiona la confianza pública y contradice flagrantemente cualquier discurso oficial sobre justicia tributaria y social, exige una respuesta contundente y explicaciones claras por parte de los altos funcionarios responsables, haciendo ineludible el ejercicio de un riguroso control político por parte de este Congreso para determinar responsabilidades y exigir correctivos urgentes.

Por lo anterior, cítese e invítese a debate de control político en los próximos 30 días calendario, al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, al señor Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al señor Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con el fin de que absuelvan las preguntas contenidas en el cuestionario que a continuación se relaciona.

Atentamente,

 Jhon Jairo Berrio	 Oscar D. Perez	 Yulieth Sanchez	 CHRISTIAN GARCES
Juan Espinal	Hugo Archila	Elizabeth Jay Pong	Ana Rogelia Monsalve
Duvalier Sanchez Rep. Valle	Piedad Correal	Holmes Echeverria	Heveria CAPANID
Aljune Aljune	Alexandro Usquez	Leonor Palencia	Armando Toboquin

ALBAN - CORALES

Baronato

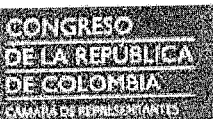
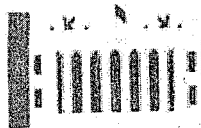
Remon Gomez

canedo

H R Jhon Jairo Berrio López

Bogotá, Carrera 7 N° 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 403.

24



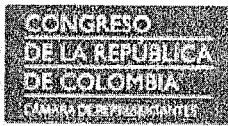
A. CUESTIONARIO MINISTERIO DE HACIENDA

- 20-194
1. Considerando las numerosas denuncias sobre incrementos exorbitantes en el impuesto predial a nivel nacional, ¿cómo explica el Ministerio la aparente ineficacia de los topes establecidos en la Ley 1995 de 2019 y el PND para contener dichos aumentos en la práctica? ¿Se están aplicando correctamente estos topes en todos los municipios actualizados?
 2. ¿Dispone el Ministerio de un consolidado nacional que cuantifique cuántos predios han experimentado incrementos en el impuesto predial superiores al tope legal (IPC + 8 puntos porcentuales o el 100% del impuesto del año anterior para predios actualizados, según aplique)? De ser así, ¿qué acciones se han tomado?
 3. ¿Qué análisis costo-beneficio ha realizado el Ministerio que justifique el impacto social y económico adverso sobre miles de familias colombianas frente al esperado aumento del recaudo fiscal municipal derivado de la actualización catastral?
 4. Más allá de los topes legales, ¿qué medidas de choque o alivios tributarios adicionales ha contemplado o implementado el Ministerio para los hogares y pequeños propietarios que enfrentan dificultades severas para pagar el nuevo impuesto predial en todo el país?
 5. ¿Cómo se concilia la meta de aumentar el recaudo municipal con la responsabilidad del Gobierno Nacional de proteger la capacidad económica de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, frente a incrementos impositivos derivados de actos administrativos como la actualización catastral?

H R Jhon Jairo Berrío López

Bogotá, Carrera 7 N° 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 403.

2h

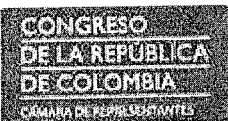
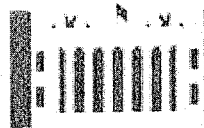


B. CUESTIONARIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

1. ¿Cómo se articula la generación de malestar social y dificultades económicas para miles de colombianos, producto de la actualización catastral, con los objetivos de equidad y justicia social consignados en el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida"?
2. Siendo el catastro "multipropósito", ¿qué porcentaje real de la inversión y el esfuerzo en la actualización se ha destinado a fines distintos al fiscal (ordenamiento territorial, gestión de riesgos, titulación) y qué resultados concretos en estos otros fines pueden mostrarse a nivel nacional? ¿O se ha privilegiado abrumadoramente el objetivo recaudatorio?
3. ¿Reconoce el DNP fallas en la planificación, socialización o articulación interinstitucional del proceso de actualización catastral que hayan contribuido a los impactos negativos denunciados a nivel nacional? ¿Qué correctivos se están implementando?
4. ¿De qué manera la implementación actual del catastro multipropósito respeta y fortalece la autonomía de las entidades territoriales, o por el contrario, impone cargas y problemáticas cuya gestión recaerá principalmente en los municipios?
5. ¿Cuál es la estrategia del DNP para asegurar que la actualización catastral no exacerbe las desigualdades territoriales existentes en el país?

H R Jhon Jairo Berrío López

Bogotá, Carrera 7 N° 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 403.



C. CUESTIONARIO INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

- 20-194
1. Como máxima autoridad catastral nacional, responsable de establecer la regulación técnica, ¿cómo garantiza el IGAC la objetividad y precisión de las valoraciones catastrales realizadas bajo su normativa en todo el país, frente a las presiones por aumentar el recaudo fiscal municipal?
 2. Explique detalladamente los mecanismos *específicos* de auditoría y control de calidad que aplica el IGAC *antes, durante y después* de los procesos de actualización masiva (realizados por el propio IGAC o por gestores habilitados) para prevenir errores sistemáticos o avalúos inflados, especialmente cuando se usan métodos indirectos o modelos econométricos. ¿Son estos controles realmente efectivos, a juzgar por los resultados denunciados?
 3. Ante la avalancha de quejas a nivel nacional, ¿cuál es el diagnóstico *interno* del IGAC sobre las causas raíz de los avalúos presuntamente desproporcionados? ¿Se debe a fallas metodológicas, cartografía desactualizada, errores de los gestores, falta de supervisión eficaz del IGAC, o una combinación de factores?
 4. ¿Podría el IGAC proveer acceso público y detallado a los modelos matemáticos, algoritmos y bases de datos de referencia (mercado inmobiliario, características constructivas) utilizados para las valoraciones masivas en diferentes regiones del país, garantizando plena transparencia y permitiendo la verificación independiente de los resultados?
 5. ¿Qué porcentaje de los procesos de actualización catastral a nivel nacional son ejecutados directamente por el IGAC y qué porcentaje por otros gestores habilitados? ¿Existe evidencia de que los resultados (en términos de precisión y aceptación ciudadana) difieran significativamente según quién ejecute la actualización?

H R Jhon Jairo Berrío López

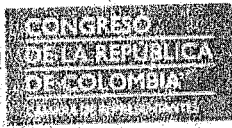
Bogotá, Carrera 7 N° 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 403.



- 2°-194
6. ¿Cuántas reclamaciones o recursos relacionados con el avalúo catastral (componente físico o económico) ha recibido el IGAC (o han sido reportadas por los gestores al SINIC) a nivel nacional en los últimos dos años? ¿Qué porcentaje ha sido resuelto a favor del ciudadano y cuál es el tiempo promedio de resolución? ¿Considera que el sistema de PQRSD es adecuado y justo para el ciudadano frente a la complejidad técnica del catastro?
 7. Cuando se comprueban errores significativos en los avalúos realizados por un gestor catastral habilitado, ¿qué tipo de sanciones o medidas correctivas impone el IGAC? ¿Asume el IGAC alguna responsabilidad patrimonial o administrativa directa por los perjuicios causados a los ciudadanos debido a la falla en su labor de supervisión?
 8. Se han recibido reportes sumamente preocupantes de ciudadanos a nivel nacional sobre presuntas irregularidades graves en la actualización catastral que van más allá de simples errores de avalúo; específicamente, se denuncian casos donde a un único predio (como por ejemplo el predio con matrícula inmobiliaria 142-2322), identificado con una matrícula inmobiliaria preexistente y sin haber sufrido ninguna división material, ni haber iniciado procesos legales de parcelación o sometimiento a propiedad horizontal, súbitamente se le asigna una segunda referencia o cédula catastral por parte del gestor catastral. Esta duplicidad anómala resulta, según los reportes, en que al propietario se le giren dos cobros de impuesto predial por el mismo terreno físico: uno correspondiente a la referencia antigua (a veces con un valor relativamente bajo) y otro, completamente nuevo y usualmente con un avalúo drásticamente superior, que puede multiplicar por miles el impuesto total a pagar por un bien que no ha cambiado ni física ni jurídicamente. Ante denuncias de esta naturaleza, que sugieren una posible manipulación de la base catastral con fines puramente fiscales y que contravendría la normativa legal: ¿Qué protocolos y controles *específicos* tiene implementados el IGAC para detectar y prevenir activamente la creación de múltiples referencias catastrales asociadas a una única matrícula inmobiliaria y a un único cuerpo cierto, cuando no existe un acto jurídico o material que lo justifique (como desenglobe, parcelación, PH)? ¿Cómo se garantiza la coherencia entre la base catastral

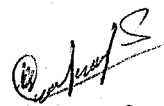
H R Jhon Jairo Berrío López

Bogotá, Carrera 7 N° 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 403.



y la realidad registral y física del predio para evitar estas duplicidades? ¿Tiene el IGAC un registro de cuántos casos con estas características (doble cédula catastral para un mismo folio de matrícula sin justificación legal/material) se han detectado a nivel nacional en los últimos dos años, y si los tiene, por favor suministrarlos y qué acciones correctivas inmediatas y definitivas se toman para anular las referencias catastrales indebidamente creadas y los cobros asociados, asegurando que no se vulnere el derecho de propiedad y la seguridad jurídica de los ciudadanos?

- 20-194
9. ¿Qué acciones concretas ha emprendido el IGAC, más allá de los procedimientos ordinarios de reclamación, para atender de manera proactiva y masiva las denuncias sobre avalúos exorbitantes en regiones específicas del país?
 10. Respecto al "enfoque multipropósito": ¿Puede demostrar el IGAC con indicadores concretos cómo la información no fiscal levantada (ambiental, social, de uso del suelo) está siendo efectivamente utilizada por entidades territoriales y nacionales para la toma de decisiones en planificación u otras políticas públicas? ¿O sigue siendo el componente fiscal el eje dominante y casi exclusivo del proceso?
 11. ¿Ha reevaluado el IGAC la idoneidad de mantener habilitados a gestores catastrales (municipios, empresas privadas) que acumulan un alto número de quejas o evidencias de problemas técnicos recurrentes en sus procesos de actualización? Presentar lista de gestores bajo seguimiento especial o en proceso de deshabilitación.


Jhon D Puc 3

H R Jhon Jairó Berrío López

76

Bogotá, Carrera 7 N° 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 403